

José Errejón

## A vueltas con la recuperación

La recuperación económica, tras la caída de más del 10% del PIB en 2021, constituye hoy uno de los puntos esenciales del debate político. Gobierno y oposición de derechas discuten sus términos y sus garantías de durabilidad en el difícil contexto global que la prolongación de la pandemia y de la situación inflacionaria representan para las economías global y estatales. Del cambio climático parece que habrá que esperar a una nueva COP para que los gobiernos y las grandes corporaciones vuelvan a practicar sus lamentos inútiles y sus promesas de cambiar sus pautas de conducta.

Los informes más actuales obligan a ser precavidos a pesar de la euforia de Sánchez y Calviño al mostrar los positivos datos de crecimiento del empleo y la recaudación fiscal. La persistencia de la presión inflacionaria se refleja en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios casi 3 puntos en relación con un incremento del IPC del 6,5%. Incluso el crecimiento del 5 % del PIB debe relativizarse pues casi la mitad de este incremento se debe a la acumulación de inventarios de las empresas después de la pasada crisis de abastecimientos.

Por nuestra parte señalamos algunas condiciones objetivas para la recuperación económica, para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento: 1) mantener el modelo de fuerza de trabajo precarizada y con reducida capacidad contractual; 2) mantener todo lo posible la política monetaria expansiva, la liquidez y las compras de activos por el BCE a riesgo de generar más inflación; 3) que frene el proceso inflacionario, evitando efectos de segunda vuelta (es decir, que los salarios sigan muy por debajo del incremento de los precios); 4) la política de "no hay alternativas", santo y seña del neoliberalismo en las últimas cuatro décadas; 5) la banalización de la democracia y la reducción de la izquierda a consignas como "defender la democracia" (reducido a defender el régimen parlamentario) y "frenar al fascismo".

Algunas condiciones se van cumpliendo: el acuerdo de la reforma laboral, la llegada de fondos para las macroinversiones de las grandes corporaciones, el 1,7% de subida de los convenios, el acuerdo implícito de los partidos nacionalistas para sostener al Gobierno PSOE/UP por el interés específico de cada uno de ellos.

Particular atención merece el posicionamiento de los agentes sociales, patronal y sindicatos. Del lado de la primera, ninguna dificultad para firmar el Acuerdo tripartito, solo aquellas patronales cuya viabilidad es la hiperexplotación de la mano de obra precaria (hostelería, construcción, comercio, agricultura) se han opuesto a un acuerdo que deja intacto, en palabras de Garamendi, el modelo instaurado por la reforma del 2012. El economista Juan Ramón Rallo ha llegado a calificar el Acuerdo como "la institucionalización del modelo laboral del 2012".

Del lado sindical, hay dos razones, que se resumen en una sola, que explican un beneplácito contradictorio con sus propias declaraciones al comenzar la negociación. La causa que resume estos factores es la extrema debilidad del "movimiento" sindical, incapaz, no ya de impulsar movilizaciones en defensa de los derechos vulnerados por la patronal y el PP, sino ni siquiera de mantener una presencia mínima en el interior de las empresas que defienda o ponga en valor el factor trabajo en la producción. Es esta debilidad la que les ha hecho aceptar la presiones de la Ministra de Trabajo para firmar antes del 31 de Diciembre, contra la promesa de que los recursos del NGEU impulsarán las inversiones y los puestos de trabajo y, con ellos, la recuperación de la capacidad de interlocución perdida hace una década.

Los partidos de la derecha van a intentar sostener el pulso al gobierno hasta donde sea preciso, sabedores como son de la incapacidad sindical para levantar un movimiento real de defensa del acuerdo. Los de la izquierda gubernamental se agarran al acuerdo para presumir de cumplimiento de sus promesas electorales y del programa de gobierno, con vistas a 2023. Del resto de la izquierda no parece percibirse, más allá de las por lo demás indispensables llamadas a la resistencia, idea alguna distinta del impulso al gran capital verde que postulan la UE y los gobiernos europeos. Algunos incluso parecería que han dado por buena la llamada resurrección de la socialdemocracia y se prestan a bailar al son que la misma toque.

Más arriba nos hemos preguntado "qué recuperación". Y nuestra pregunta excede de la calidad de la misma, de si se conseguirá con más o menos empleos fijos o precarios, con más o menos desigualdad, etc; con ser todos ellos criterios importantes, va ganando peso la hipótesis de que ya no estamos en situación de impulsar una recuperación normal de la economía capitalista, que la economía, la única que conocemos, el capitalismo, ha dispuesto un conjunto de ries-

gos para la supervivencia de nuestra especie y la biosfera tales que nos obligan de forma imperiosa y urgente a pensar en soluciones no en términos nacionales sino en términos de especie; no en términos de crecimiento y distribución, sino atendiendo, de forma prioritaria, al cuidado de los sistemas naturales y los procesos ecológicos esenciales.

Hemos visto como el gobierno incluía la transición ecológica como uno de los cuatro ejes que estructuran su plan de Reconstrucción. Hay que afirmarlo con toda claridad, transición ecológica no es llenar la España vaciada de parques eólicos y fotovoltaicos promovidos por las grandes compañías eléctricas y los fondos de inversión, a la postre beneficiarios principales de los recursos del NGEU

En todo caso, el Gobierno se apresta, junto con los de Italia y Francia, a conseguir que la redefinición del Pacto de Estabilidad y Crecimiento excluya del cómputo de déficit y deuda las transferencias previstas a las grandes empresas en el Plan de Reconstrucción y ofreciendo a cambio los gastos corrientes -empleos públicos y transferencias corrientes- para financiar el gasto social.

La reforma tributaria encargada por el gobierno a un grupo de expertos ya adelanta la orientación política principal cuando propone eliminar los IVA superreducidos para los consumos básicos e implantar los nuevos "tributos verdes" en vivienda, calefacción y transportes. Estas serán, y no el tipo mínimo del impuesto de sociedades, la fuente principal de financiación con la que, después del 2023, Sánchez pretende acometer la consolidación fiscal exigida por Bruselas y también por el socialdemócrata Scholtz.

Para llevar acabo este propósito, el gobierno "más progresista de la historia" precisa aprovechar al máximo las posibilidades que le brindan el año que acabamos de empezar. La modernización -que no derogación- de la reforma laboral del 2012 es presentada por la ministra de trabajo y preten-

didá cabeza del agrupamiento de cuanto está a la izquierda del PSOE, como la primera ocasión en que un Acuerdo tripartito "ha recuperado derechos"; este será, por tanto, el principal activo con el que se intentará atraer al electorado trabajador y asalariado en las elecciones del 2023. Será acompañado por la presentación de la tasa más alta de crecimiento del PIB y creación de empleo de los últimos años gracias a la ingente entrada de recursos financieros del NGEU. Poco importa a estos efectos electorales la duración de los empleos creados y los que se crearán con las inversiones del Plan de Reconstrucción. En lo que concierne a las renovables, muchos empleos en su construcción y luego unas pocas decenas para su gestión.

El acuerdo tripartito está así llamado a desempeñar dos funciones. Se trata en primer lugar de cumplir la exigencia de Bruselas para seguir librando los recursos del NGEU que financian el Plan de Reconstrucción, condición de posibilidad para el proyecto "socialdemócrata" de Sánchez de revalidar su mandato en 2023. En segundo lugar, tiene un papel clave en la construcción de la imagen y el relato de la carrera de Yolanda Díaz. Ahí reside una buena parte del acuerdo objetivo entre los socios del Gobierno, más allá de las ilusiones compartidas en la vuelta a una moderada modalidad de pacto keynesiano; en la Exposición de Motivos del RDL 32/2021, se postula explícitamente este acuerdo como una parte esencial de la renovación del diálogo social.

El examen de este acuerdo merece un espacio y una atención que desbordan los límites de estos comentarios pero sí cabe señalar la coincidencia de los partidos de la izquierda del régimen de 1978 para resucitar el Estado social; parecería que la vuelta del Estado (pero ¿se había ido alguna vez, de verdad se habían creído que el neoliberalismo quería reducir el Estado?) alentaría por sí solo este reverdecer socialdemócrata con el que se quiere hacer olvidar el caudal de ilusión y esperanza despertado en 2011.

Desde Moncloa se opera con un escenario en el que la recuperación y la salida de la sexta ola de la pandemia producirían un cierto relajamiento sobre la evidente crispación política pero también ciudadana actual con el cual sería más fácil "vender" los logros del gobierno progresista, explotando al tiempo el temor al triunfo de la derecha radicalizada.

La secuencia de elecciones autonómicas en Castilla y León, primero, y Andalucía después, es un inconveniente no pequeño para la realización de estas aspiraciones. Todas las previsiones señalan como más probable el triunfo de la derecha en ambas y esta vez sin la molesta presencia de Cs que estimula esa "derechita cobarde" que al decir de Abascal anida en el PP. De cumplirse tales previsiones y por muy bien que saliera el cuento de la lechera que Moncloa prepara, el PSOE tendría muy difícil contrarrestar la sensación de derrota generalizada que cundiría sobre todo en su electorado más moderado, ese que alimentó en buena medida las aspiraciones de Albert Rivera y que tiembla con la presencia de los "comunistas" en el Gobierno.

Es inútil pretender una racionalización de las expectativas electorales, enfatizando las carencias de esta derecha sectaria y, especialmente de su candidato a la presidencia del Gobierno. El clima de resentimiento existente en la sociedad española, desperdiciado en su momento por *Podemos* para impulsar un proceso de renovación constituyente, asienta condiciones muy favorables para la apertura de un ciclo reaccionario en la política de España. Han sido muchos años de erosión por las políticas neoliberales de los lazos que unían a las clases populares con las instituciones democráticas.

La recuperación de esta confianza exigiría una enérgica acción de gobierno que permitiera visualizar en los sectores populares las diferencias existentes con las políticas de la derecha. Y para eso no hay más remedio que arriesgar, incluso frente a las instituciones comunitarias. Los datos son abru-

madores: a la caída del poder adquisitivo sufrido en 2021 por las familias trabajadoras hay que unirle el que solo 1,2 millones de trabajadores, el 15,56% de los amparados por convenio colectivo, tiene cláusula de garantía salarial. El descenso de la cláusula de garantía salarial se produce a partir de la llegada del PP al Gobierno: en 2012 cayó del 42% a poco más del 27%. Así, los años de inflación cero que podían haber sido aprovechados para equilibrar algo la relación entre rentas del capital y del trabajo, sirvieron para una clara redistribución "hacia arriba".

Arriesgar es para el Gobierno atreverse a cumplir parte de su programa en la convicción de que la única posibilidad de continuar en la Moncloa pasa por recuperar siquiera una parte de la esperanza de cambio que en la pasada década despertó el 15M y el primer *Podemos*. Sin ese caudal de esperanza, sin esa confianza en que la mayoría de la sociedad puede lograr equilibrar el poder de la oligarquía y, en su caso, revertir la degradación de las condiciones sociales operadas durante los gobiernos del PP, los socios gubernamentales no lograrán revalidar su mandato porque tendrán enfrente una convergencia muy amplia de sectores sociales, sin que por *contra natura* que sea eso impida el triunfo de la derecha.

Si el Gobierno no manda señales claras de que los ricos van a cargar con más peso para afrontar la recuperación, la transformación de la desilusión en resentimiento social dará un paso más hacia el odio a la democracia y los más de abajo pedirán, sobre todo, venganza.

El reto va más allá del crecimiento del PIB y el empleo, incluso si este fuera de calidad lo que no parece el caso. Lo que hay que reconstruir son esas condiciones de convivencia en igualdad -por parcial y relativa que fuera- que sostienen la democracia. Si no es así, los sectores más desfavorecidos volverán la espalda a la democracia y, sin ella, nada podrá oponerse al proyecto histórico de derrota del mundo del trabajo en el camino a la neoservidumbre.

La crisis del 2008 fue el comienzo del descrédito de la democracia entre los sectores populares; el 15M y el primer *Podemos* tuvieron por momentos esa desafección popular pero en 2016 se dejó pasar la oportunidad y el *procés* excitó el resentimiento hacia las instituciones constitucionales y hacia el derecho a la autonomía en forma de apoyo a la extrema derecha.

El gobierno de coalición y el bloque de investidura constituye una nueva oportunidad (¿la última?) para que la crisis del régimen de 1978 se resuelva en sentido de profundizar la democracia. Para ello hay que disputar el apoyo popular a la derecha y al fascismo pero hay que hacerlo reconociendo y potenciando su existencia autónoma del capital y del Estado. Deben ser los sectores populares los protagonistas del proceso de reconstrucción y para ello hay que favorecer su constitución independiente de forma que puedan hacer valer sus aspiraciones frente a las de los acreedores de la deuda pública. Porque la reconstrucción que necesitamos va más allá del crecimiento del PIB, necesitamos reconstruir esa condición activa de la sociedad que la convierte, en ocasiones como los últimos años del franquismo o el 2011, en protagonista de su destino.